

NÚMERO 35

28ª SESIÓN ORDINARIA. 18 DE AGOSTO DE 1904

PRESIDENCIA DEL DOCTOR QUIRNO COSTA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

- II.—El señor Senador Doncel funda un proyecto de ley presentado por él y varios señores senadores, prorrogando por 5 años el plazo fijado por el artículo 14 de la Ley número 3195, referente á la **caducidad de las pensiones** graciablen. Se destina á la orden del día.
- III.—El señor Senador Láinez presenta y funda un proyecto de ley sobre **títulos de deuda interna**. Se destina á la Comisión de Hacienda.
- IV.—Se aprueba un despacho de la Comisión de Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre **clasificación de vinos**.
- V.—Consideración de un proyecto sobre **Caja de Montepío Civil**.

SEÑORES SENADORES

En Buenos Aires, á los diez y ocho días del mes de Agosto de mil novecientos cuatro, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores senadores al margen consignados, se abre la sesión con inasistencia de los señores Pérez, con licencia; Avellaneda, Del Campillo, Echagüe, Villanueva (E.), Irigoyen, Mantilla, Mendoza, Puccio, Quiroga, Terán y Villanueva (B.), con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior, de trece del corriente (27a. ordinaria), se da cuenta de los

I

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

Al honorable Congreso de la Nación.

Los señores Hopkins Gardom y Tettley se han presentado solicitando prórroga sobre construcción de esclusas en el Río

chuelo á que se refieren las leyes números 3552 y 4078, y el Poder Ejecutivo tiene el honor de someter á Vuestra Honorabilidad, dicha petición, por cuanto no está en sus facultades resolverla.

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.

JULIO A. ROCA.

EMILIO CIVIT.

El Poder Ejecutivo acusa recibo de la nota, fecha 26 de Julio próximo pasado, la cual acompaña el proyecto de ley abriendo un crédito extraordinario al Departamento de Relaciones Exteriores y Culto para el pago de diversos expedientes.

—Al archivo.

La Cámara de Diputados comunica haber sancionado definitivamente los siguientes asuntos:

1º—Aprobando el convenio celebrado entre la República Argentina y Chile, estableciendo el límite al Norte del paralelo 23;

2º—Aprobando otro convenio firmado por los plenipotenciarios de la República Argentina y de Chile;

3º—Aprobando el tratado de amistad y comercio con el Imperio Persa;

4º—Aprobando el convenio celebrado con la República Oriental, tendiente á suprimir la legalización de las firmas en las comisiones rogatorias en materia civil y criminal;

5º—Declarando de utilidad pública los terrenos que requiera el cambio de ubicación de la estación San Luis.

—Al mismo destino.

Agosto 18 de 1904

CÁMARA DE SENADORES

28ª sesión ordinaria

puede hacer todas las alusiones que quiera, porque ya no tendré por qué explicar opiniones personales.

He dicho.

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se va á votar el artículo 3º.

—Se vota y se aprueba así como los siguientes hasta el 10 inclusive.

—Se lee el 11.

Sr. Uriburu (F.)—Pido la palabra.

La Comisión ha modificado este artículo.

Un representante del comercio de vinos españoles se presentó á la Comisión haciendo una observación que, á juicio de ella, es justa.

Si se establece la venta exclusivamente de los vinos en la vasija en que llegan, cuando el comercio necesite fraccionar ese vino ó embotellarlo quedaría perjudicado.

Hasta ahora se ha consentido esta operación en la aduana misma, con intervención del Poder Ejecutivo, por lo que la Comisión propone la siguiente adición: «Los vinos extranjeros que se introduzcan en el país para el consumo deberán ser vendidos en sus cascos de origen ó embotellados con la intervención del Poder Ejecutivo». Y en la segunda parte del artículo, donde se hace relación á los que se introduzcan con más de 35 por 1000 de extracto seco, debe ponerse, «libre de azúcar reductor», que es la idea que la Comisión ha tenido y que ha sido sancionada ya en los artículos anteriores.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo 11 con las dos modificaciones propuestas por la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa; aprobándose los artículos 12 á 18 inclusive.

—Se lee el 19.

Sr. Uriburu (F.)—Hay que agregar después de la palabra «seco» las siguientes: «libre de azúcar reductor».

—Se vota este artículo con el agregado propuesto y se aprueba, así como el resto del proyecto.

V

Sr. Presidente—Invito á la Cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Así se hace.

—Vueltos á sus asientos los señores senadores, dice el

Sr. Presidente—Continúa la sesión.

—Se lee:

Honorable Senado:

Las comisiones de Legislación y Hacienda han tomado en consideración el proyecto de ley, en revisión, sobre la Caja de Montepío Civil; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra sanción.

Sala de la Comisión, agosto 11 de 1904.

Palacio.—Santillán.—Del Campillo.—Puccio.—F. Uriburu.
—B. Villanueva.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º.—Créase una Caja Nacional de jubilaciones y pensiones para los funcionarios, empleados y agentes civiles de que habla el artículo 2º.

Declárase que los fondos y rentas de esa caja son de propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley, y que con ellas se atenderá al pago de las jubilaciones concedidas en virtud de las leyes números 1909, 2219 y 3744 y al de las jubilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerden en conformidad á la presente.

Art. 2º.—Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley.

Inciso 1º.—Los funcionarios, empleados y agentes civiles que desempeñen cargos permanentes en la administración, cuyas remuneraciones figuren en el Presupuesto anual de gastos de la Nación.

2º.—Los directores, empleados y demás personal del Consejo Nacional de Educación á que se refiere la ley número 1909.

3º.—Los empleados del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional.

4º.—Los jubilados existentes, á los efectos del capítulo IV.

5º.—Los magistrados judiciales, ministros de estado, y los que desempeñen cargos efectivos, que á ella se acojan, siempre que los que pertenecen á las dos últimas categorías, hayan prestado 20 años de los servicios á que se refiere el inciso 1º de este artículo.

6º.—El personal de los ferrocarriles de la Nación.

Art. 3º.—Esta ley no regirá respecto á las remuneraciones siguientes:

1º.—Las de las personas expresadas en el

inciso 5º del artículo 2º cuando no se acojan á la presente ley.

2º—Las de los servicios que sean contratados en virtud de autorizaciones especiales y teniendo en vista la competencia excepcional de las personas, salvo que hubieran contribuido desde su incorporación al servicio á la formación del fondo de la caja con el descuento de que habla el inciso primero del artículo 4º.

3º—Las de los obreros que trabajan por jornal en las obras públicas ó en talleres industriales del Estado, salvo aquellos que presten servicio permanente y contribuyan con el referido descuento.

4º—Las del personal de la Sociedad de Beneficencia de la Capital de la República.

5º—Las de aquellos que desempeñen comisiones accidentalmente ó por tiempo fijo.

CAPITULO I

De la Caja Nacional

Art. 4º—El fondo de la Caja Nacional se formará con las siguientes asignaciones:

1º—Con el descuento forzoso del 5 por ciento sobre los sueldos de las personas comprendidas en el artículo 2º.

2º—Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo de la persona que por primera vez entra á la administración.

3º—Con la diferencia del primer mes de sueldo cuando alguna de las personas indicadas en el artículo 2º pase á ocupar un empleo mejor retribuido que el que antes desempeñaba.

4º—Con el importe de las multas que en dinero efectivo la administración imponga á su personal ó á los extraños.

5º—Con los intereses de los fondos públicos y rentas de otros bienes que la Caja adquiriera.

6º—Con el importe de los sueldos de los empleos vacantes, salvo que el Poder Ejecutivo declare, por decreto especial, que la no provisión obedece á razones de economía.

7º—Con las donaciones ó legados que se le hagan.

8º—Con la renta de diez millones de pesos en fondos públicos de 6 por ciento de interés con que contribuye el Estado.

9º—Con el importe del fondo acumulado por el Consejo Nacional de Educación en virtud de las leyes números 1320 y 1303, que pasa á formar parte del Tesoro.

Art. 5º—La Caja Nacional será administrada por una junta compuesta de un presidente administrador, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido; y de dos vocales, que lo serán el presidente de la Contaduría Nacional y el presidente del Crédito Público.

Art. 6º—El presidente administrador de la Caja Nacional podrá ser removido antes del

término fijado, á solicitud de la junta de administración, por mala conducta en el ejercicio de sus funciones, por el Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros.

Art. 7º—Faltando el presidente de la junta, sus funciones serán desempeñadas por el Presidente de la Contaduría Nacional.

Art. 8º—La junta de que habla el artículo 5º estará especialmente obligada:

1º—A velar por la fiel observación de las prescripciones que la presente ley establece para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones;

2º—A cuidar que no continúe en el goce de ella ninguna persona que haya perdido el derecho de percibirla;

3º—A rendir cuenta trimestralmente de sus operaciones á la Contaduría General de la Nación y á publicar cada tres meses el estado correspondiente;

4º—A elevar al Ministerio de Hacienda, al fin de cada ejercicio económico, una memoria completa sobre la situación de la Caja, señalando los inconvenientes con que se hubiere tropezado y proponiendo las modificaciones de la ley que la práctica demostrara necesarias, especialmente las que se refieren á la proporcionalidad de los recursos que se acumulen con relación á las erogaciones que hubiesen sobrevenido ó se presuma que deben ocurrir, siempre bajo la base de los recursos que la presente crea deben por sí sólo bastar para llenar sus fines;

5º—A darse un reglamento interno, sometiendo á la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 9º—La junta de la Caja Nacional percibirá los fondos expresados en el artículo 4º; pagará las jubilaciones y pensiones á que se refiere esta ley, formulará su presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo y atendido con los fondos de la Caja; nombrará y removerá el personal á sus órdenes.

Art. 10.—En ningún caso podrá disponerse de parte alguna de los fondos de la Caja para otros fines que los mencionados en esta ley, bajo la responsabilidad personal de los directores, que se hará efectiva en sus bienes por disposición del Poder Ejecutivo ó á solicitud de cualquiera de las personas de que trata el artículo 2º.

Art. 11.—La Caja no podrá atesorar suma en dinero efectivo que no requiera para los gastos corrientes y una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en dinero serán colocados en el Banco de la Nación.

Art. 12.—Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, los fondos de la Caja serán invertidos por ésta en títulos de la deuda nacional, de manera que le produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización posibles.

Art. 13.—La adquisición ó enajenación de títulos nacionales se hará por llamado á licitación, salvo que la junta por unanimidad re-

suelva en casos especiales proceder en forma distinta.

Art. 14.—Las cantidades que, según el artículo 4º, forman el fondo de la Caja Nacional, serán retiradas mensualmente por las cajas nacionales que paguen ó liquiden sueldos y entregadas sin demora á la primera.

Art. 15.—Declárase inembargables los bienes de la Caja Nacional establecidos por la presente ley.

CAPITULO II

De las jubilaciones

Art. 16.—Los funcionarios, empleados ó agentes civiles de la Nación, expresados en el artículo 2º tendrán derecho á jubilación con arreglo á las disposiciones de la presente ley.

Art. 17.—La jubilación es ordinaria ó extraordinaria. La ordinaria equivale al 2.70 por ciento del último sueldo multiplicado por los años de servicio del que obtenga su jubilación. La extraordinaria, equivale al 2.40 por ciento del último sueldo multiplicado también por los años de servicio del jubilado.

Art. 18.—La jubilación ordinaria se acordará al empleado que haya prestado cuando menos treinta años de servicio y tenga cincuenta y cinco ó más años de edad.

Art. 19.—La jubilación extraordinaria se acordará al empleado que, después de cumplir veinte años de servicios, fuese declarado, por enfermedades resultantes del ejercicio de las funciones, física ó intelectualmente inhabilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, y al que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se inutilizase física ó intelectualmente en un acto del servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo.

Art. 20.—A los efectos de la jubilación, sólo se computarán los servicios efectivos durante el número de años requerido, que hayan sido prestados sin interrupción, salvo lo dispuesto en el artículo 24.

Las interrupciones del servicio ocurridas antes de la promulgación de esta ley, que no hayan excedido de cinco años y que hayan sido causadas por renuncia del empleado, no perjudicarán los derechos acordados por la presente, ni se considerará como interrupción de servicio la que sea originada por enfermedad, servicio militar obligatorio ó fuerza mayor debidamente justificados. Pero en ningún caso la duración de las interrupciones se computará como tiempo de servicio prestado.

Art. 21.—A los empleados del Banco de la Nación ó del Hipotecario Nacional se les computará los servicios que hayan prestado en el Banco Nacional actualmente en liquidación.

Art. 22.—Únicamente podrán volver al servi-

cio los que hayan obtenido jubilación ordinaria. En ese caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Cuando abandone éste, volverá al goce de la jubilación sin que pueda tener derecho á que le sea aumentada. Si es llamado á desempeñar funciones públicas accidentales, no podrá cobrar retribución alguna al Estado.

Art. 23.—No podrá computarse á las personas de que habla la última parte del artículo 19, para determinar el monto de su jubilación extraordinaria, un tiempo menor de quince años de servicio.

Art. 24.—Los empleados que, habiendo sufrido el descuento establecido en el artículo 4º durante diez años continuos, renunciaren sus puestos, conservarán el derecho de que les sean computados esos años de servicios para acogerse á los beneficios de esta ley, siempre que en sus renunciaciones hicieren constar la reserva correspondiente é ingresaren nuevamente á la administración dentro de un plazo de tres años, contados desde la fecha de su aceptación. El tiempo transcurrido fuera de servicio no se les computará.

Art. 25.—A los efectos establecidos en los artículos 17 y 23, declárase último sueldo el promedio de sueldo mensual que el interesado hubiera percibido durante los cinco años de servicio.

Para los empleados cuyos emolumentos no sean determinados por el Congreso, el último sueldo será el promedio mensual que hubieren percibido durante los diez últimos años del servicio.

Art. 26.—No se computarán los servicios prestados antes de la edad de 18 años, salvo para los que, desde su incorporación al servicio con esa edad, hayan sufrido el descuento del 5 por ciento en sus sueldos.

Art. 27.—Los empleados despedidos por razones de economía ó por no requerirse sus servicios, y los que cesen por cambio de designación en el orden administrativo, ó las supresiones que se hicieran en los presupuestos anuales ó en leyes especiales, tendrán derecho á reclamar la devolución del 5 por ciento descontado de sus sueldos con el interés del 5 por ciento capitalizado por año.

Art. 28.—Ninguna jubilación podrá exceder del 95 por ciento del último sueldo percibido.

Art. 29.—La jubilación deberá solicitarse, so pena de nulidad, ante la junta de administración, quien, después de llenados todos los trámites, la acordará ó nó, elevándola, por intermedio del ministro que corresponda, á la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 30.—Si se solicitase jubilación extraordinaria, la junta de administración, sin perjuicio de las averiguaciones que estime procedentes, se dirigirá al Departamento Nacional

de Higiene, para que informe sobre las causas alegadas de imposibilidad física ó intelectual.

Art. 31.—El derecho acordado por el artículo 18 de esta ley podrá ser ejercido por los maestros de instrucción primaria, las clases y agentes de policía de seguridad y por los jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos con veinticinco años continuados de servicio y cincuenta de edad. En este caso la jubilación ordinaria equivaldrá al 3.24 por ciento del último sueldo multiplicado por veinticinco.

Art. 32.—No tratándose de funcionarios inamovibles, podrá el Poder Ejecutivo jubilar de oficio á los que se hallen en las condiciones de los artículos anteriores, cuando así lo exija el buen servicio público. En este caso la resolución será tomada con intervención de la junta de administración, audiencia del interesado y en acuerdo de ministros.

Art. 33.—Las fracciones de años para el cómputo de servicios se apreciarán por años enteros si alcanzaren á seis meses. Si fuesen menores no serán computadas.

Art. 34.—Las jubilaciones concedidas hasta la promulgación de la presente, en virtud de lo dispuesto por las leyes números 1909, 2219 y 3744, serán en lo sucesivo pagadas por la Caja Nacional, con una reducción del 10 por ciento sobre su valor actual.

Art. 35.—Cuando un empleado hubiese desempeñado dos ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, la jubilación se acordará sobre el sueldo mayor, sin acumularse el tiempo de los otros ni el sueldo. Exceptúase el caso de los empleos del profesorado, en el cual se acumularán los sueldos á condición de que, por lo menos, se haya sufrido durante cinco años el descuento del 5 por ciento en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas.

Art. 36.—Las jubilaciones serán pagadas desde el día en que el interesado deje el servicio.

CAPITULO III

De la pérdida de la jubilación

Art. 37.—No tendrán derecho á ser jubilados:

- 1º—El que hubiese sido separado del servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo.
- 2º—El que hubiese sido condenado por sentencia judicial por alguno de los delitos clasificados en el Código Penal, como "peculiares á los empleados públicos", y en general por delitos contra la propiedad ó cualquiera otro que merezca pena de penitenciaría ó presidio.
- 3º—El que no solicitase su jubilación den-

tro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio.

Art. 38.—La jubilación es vitalicia y el derecho á percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en el inciso 2º del artículo anterior.

Art. 39.—La conmutación ó el indulto no harán recobrar los derechos perdidos según los artículos 37 y 38, si la pena ha sido impuesta por delito contra la propiedad ó peculiares á empleados públicos.

Art. 40.—No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente contra su persona, siempre que se procese por alguno de los delitos expresados en el inciso 2º del artículo 37. El interesado deberá promover previamente la terminación definitiva del proceso.

CAPITULO IV

De las pensiones

Art. 41.—En los mismos casos en que con arreglo á las disposiciones de la presente ley haya derecho á gozar jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado ó jubilado, tendrán derecho á pedir pensión en la proporción y condiciones establecidas en el presente capítulo: la viuda, los hijos y, en su defecto los padres del causante.

Art. 42.—El derecho á gozar de la pensión entre las personas mencionadas corresponderá en el orden siguiente:

- 1º—A la viuda en concurrencia con los hijos;
- 2º—A los hijos solamente;
- 3º—A la viuda en concurrencia con los padres;
- 4º—A la viuda;
- 5º—A los padres.

Los hijos naturales disfrutarán la parte de la pensión á que tengan derecho según las leyes comunes.

Art. 43.—El importe de la pensión será de la mitad del valor de la jubilación que se gozaba ó á que se tenía derecho por el causante.

Art. 44.—Si la esposa del empleado quedase viuda, hallándose divorciada por su culpa, ó viviendo de hecho separada sin voluntad de unirse, ó provisoriamente separada por su culpa á pedido del marido, no tendrá derecho á pensión; pero las demás personas llamadas á obtenerla por esta ley gozarán de ella como si la viuda no existiera.

Art. 45.—Siempre que sean varias las personas llamadas á disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho á percibirla, la parte que le corresponde acrece á los demás.

Art. 46.—Si á la muerte del causante de una

pensión quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se dividirá por iguales partes entre todos ellos entregándose a sus respectivos representantes legales.

Art. 47.—Para gozar de la pensión la viuda que no hubiere tenido hijos durante el matrimonio con el causante, deberá justificar que ha estado casada con el empleado jubilado cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el caso que existan hijos legitimados ó de que se trate de lo previsto en la última parte del artículo 19. En este caso, bastará que el matrimonio se haya celebrado antes del accidente allí expresado.

Art. 48.—El término máximo de duración de las pensiones será de 15 años, á contar desde el día del fallecimiento del causante, desde cuya época deberán abonarse.

Art. 49.—No se acumularán dos ó más pensiones en la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que le convenga, y hecha la opción quedará extinguido el derecho á las otras.

Art. 50.—Toda solicitud de pensión se presentará, so pena de nulidad, á la junta de administración, acompañada de los recaudos necesarios para justificar que el postulante se halla en las condiciones de la ley. Estando la solicitud suficientemente instruida, la junta la acordará ó no y la elevará con informe al Poder Ejecutivo para su resolución definitiva.

Art. 51.—Las personas designadas en el artículo 42 tendrán derecho á que se les liquide el importe de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho á pensión, por cada cuatro años que éste hubiera contribuido á la formación del fondo de la Caja Nacional.

Extinción de la pensión

Art. 52.—El derecho de pensión se extingue:

- 1º—Para la viuda, desde que contrajere nuevas nupcias.
- 2º—Para los hijos varones, desde que llegasen á la edad de veinte años.
- 3º—Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio ó cumplieren treinta años de edad.
- 4º—En general, por vida deshonesta, vagancia, por domiciliarse en país extranjero, ó por haber sido condenado por delito contra la propiedad ó á las penas de presidio ó penitenciaría.

Disposiciones generales

Art. 53.—Las pensiones concedidas hasta la fecha de la presente ley seguirán abonándose por la Ley de Presupuesto General, reducidas en un 10 por ciento de su valor.

Art. 54.—Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley número 3195, las Cámaras deberán fijar, con el voto de tres cuartas partes del total de los miembros de cada una, el día en que hayan de tratarse las solicitudes ó proyectos sobre pensiones graciables mayores de cien pesos. Sin este requisito previo, serán nulas las pen-

siones que se acuerden, y su importe no podrá ser liquidado por la Contaduría Nacional.

Art. 55.—Las jubilaciones y pensiones son inalienables. Será nula toda venta ó cesión que se hiciere de ellas por cualquier causa.

Los jueces solo podrán decretar el embargo de la cuarta parte de ellas, pero si la pensión correspondiese á varias personas, se embargará solo la cuarta parte de lo que deba percibir el deudor embargado.

Art. 56.—Los comprobantes con que se debe justificar el derecho para optar á jubilación ó pensión, serán los mismos que se requieren por las leyes comunes para la adquisición de derechos.

Art. 57.—En el caso de que la junta de la Caja Nacional no haya acordado una jubilación ó pensión, el Poder Ejecutivo, oído el Procurador de la Nación, resolverá el caso en acuerdo de ministros.

Art. 58.—No se computarán, á los efectos de esta ley, los servicios prestados en las municipalidades ó en las administraciones de provincia, ni tampoco los desempeñados en el ejército, cuando éstos sean retribuidos con retiro militar.

Art. 59.—El Poder Ejecutivo podrá suspender por el tiempo que juzgue necesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones, en el caso de que los recursos de la Caja Nacional no fuesen suficientes para atenderlas, dando inmediatamente cuenta al Congreso y promoviendo la revisión de la presente ley.

Art. 60.—Esta ley regirá desde su promulgación; y, al reglamentarla, el Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para que inmediatamente funcione la Caja Nacional creada por las presentes.

Disposiciones transitorias

Art. 61.—El Consejo Nacional de Educación transferirá á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones el fondo que haya acumulado para los efectos de la ley número 1909.

Art. 62.—Las personas indicadas en el inciso 5º del artículo 2º, que se acojan á la presente, deberán ingresar á la Caja el importe del descuento del 5 por ciento de que habla el artículo 4º que les hubiera correspondido efectuar desde el 1º de Enero de 1901.

Art. 63.—El Poder Ejecutivo ordenará que durante el año 1903 se levante un censo de los empleados comprendidos ó que puedan acogerse á los beneficios de la presente ley.

Art. 64.—La junta de administración hará la revisión de las pensiones y jubilaciones existentes y dará cuenta al Poder Ejecutivo de las que encuentre fuera de las prescripciones de las leyes vigentes cuando se concedieron.

Art. 65.—Deróganse todas las leyes y disposiciones que se opongan á la presente.

Art. 66.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, á 13 de julio de 1903.

BENITO VILLANUEVA.
A. M. Tallafiero,
Prosecretario.

Sr. Presidente —Está en discusión en general.

Sr. Palacio —Pido la palabra.

Encargado por las comisiones de Legislación y Hacienda para informar sobre el proyecto en discusión, lo haré brevemente como tengo de costumbre, atendiendo á que el espíritu de la Cámara se encuentra algo fatigado, y porque los antecedentes de este asunto son conocidos de los señores senadores.

Pero, antes me ha de permitir justificar la actitud y el trabajo de las comisiones, de los cargos implícitos que formulaba el señor Pérez, Senador por Jujuy, cuando presentó hace un mes próximamente su proyecto sobre devolución del descuento á los sueldos de los empleados. El año pasado, cuando vino este asunto á la Cámara, las comisiones lo estudiaron; y estaban para despacharlo, cuando llegó la época de la clausura del período ordinario de sesiones; y el Poder Ejecutivo no lo incluyó en la prórroga. Este fué el motivo por el cual las comisiones lo dejaron de mano. En seguida fué incluído en la prórroga. No necesito justificar la actitud de los senadores que no continuaron ese estudio, considerando la situación política excepcional de la República relacionada con una ley que afectaba á gran número de personas.

Este año, las comisiones, apenas constituidas, emprendieron su estudio y, como medida previa, convocaron á una reunión privada á los señores senadores para armonizar opiniones; y á ella concurrió el señor Senador por Jujuy, sabiendo positivamente que aquellas se ocupaban de este asunto. En este estado, lo que correspondía era usar de los medios reglamentarios para que el proyecto viniese á resolución de la Cámara, si se creía que estaba en retardo; pero nunca atacarlo en sus fundamentos, ordenando la devolución de los descuentos que vienen haciéndose desde 1901 al sueldo de los empleados de la administración.

Si el Senado considera la naturaleza de este proyecto, su extensión y cúmulo de antecedentes que ha habido que con-

sultar, comprenderá que en manera alguna ha importado una demora, el tiempo que las comisiones han empleado para estudiarlo.

Necesitaba, señor Presidente, dejar consignadas estas salvedades para continuar con lo que puede llamarse fundamentos de este proyecto.

Lo que podemos llamar fundamento de este proyecto, como el de todas las leyes análogas de la República, se encuentra consignado en el inciso 17, artículo 67 de la Constitución, que faculta al Congreso para votar pensiones; y esta disposición se aclara y complementa, según los comentadores, con el inciso 7º del artículo 86, que autoriza al Poder Ejecutivo para conceder pensiones, retiros y goce de montepío, conforme á las leyes de la Nación.

El espíritu que informa el despacho de las comisiones, se desprende de todas y cada una de sus cláusulas, y se encuentra además consignado en varios documentos oficiales; pero, especialmente, en el mensaje de apertura del Congreso del año 1887, y en el de 1900, mandando el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 1901. El primero de estos documentos es el que más directamente y con mayor franqueza considera este capítulo de pensiones y jubilaciones, bajo su triple aspecto social, político y económico; y el segundo acumula y sintetiza todos los antecedentes que demuestran la necesidad de esta ley, patentizando los graves perjuicios de orden diverso que experimenta la República con la continuación del régimen actual, y pronosticando un porvenir de bancarrotas si seguimos con el mismo.

Desgraciadamente, carecemos de los antecedentes que se reputan necesarios para predecir con exactitud el resultado final de esta ley que, según el concepto con que ha sido votada en la otra Cámara, y según el concepto de las comisiones del Senado, es una ley de ensayo.

Esos antecedentes se refieren á la movilidad de los empleados, al personal fu-

turo, á la edad y años de servicio de los mismos; investigación que, juntamente con el censo, podrá realizarse con ventaja bajo la inspección inmediata de la junta de administración, lo que le permitirá á ésta proponer enmiendas previsoras y acertadas.

La base del proyecto es la misma adoptada ya para el ejército y para la instrucción primaria de la capital de la República; es decir, la acción conjunta y combinada del Gobierno y del empleado público, á fin de formar una caja que baste en todo tiempo al servicio de las jubilaciones y pensiones que de las mismas puedan derivarse.

Por lo demás, el examen de las disposiciones del proyecto ofrecerá la clave para resolver sobre sus ventajas ó inconvenientes.

Lo que puede llamarse primera parte del mismo contiene lo referente á la creación de la Caja, personal administrativo comprendido y exceptuado, fondo ó capital y administración de éste.

No creo que deba referirme á todos los antecedentes, tan numerosos, que existen sobre el particular en las carteras de las comisiones de Legislación y Hacienda, porque han sido publicados y distribuidos; y los supongo, por consiguiente, conocidos de los señores senadores. Su repetición resultaría inútil y fatigosa, máxime cuando se basan sobre datos de escasa comprobación, careciendo por tanto de la exactitud que sería indispensable para apreciarlos debidamente.

Por consiguiente, señor Presidente, el informe de las comisiones tiene que reducirse á considerar principalmente las observaciones fundamentales formuladas sobre cláusulas del proyecto, por los que se dicen interesados ó más bien afectados por las mismas—observaciones que en la generalidad de los casos hacen relación á principios, que podemos llamar vitales, en la ley.

El artículo 1º, en su primera parte, contiene declaraciones meramente teóri-

cas, que, aunque aclaradas y explicadas en varias disposiciones del proyecto, deben ser fijadas con precisión en su alcance y significado.

La segunda parte de este artículo queda aclarada con lo dispuesto en los artículos 15 y 55. Así, cuando se dice que los fondos y rentas de la Caja son de propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones de la ley, solo se quiere significar que pertenecen al cuerpo general de empleados que forma esta institución que se llama Caja Nacional y que es de carácter público y nacional también; para servir intereses públicos vinculados al personal de la Administración y al Tesoro.

No puede entenderse que sea algo así como una propiedad privada de los empleados que contribuyen á formarla, porque entonces no tendrían sentido ni objeto los referidos artículos 15 y 55. Este fué el sentido y el alcance con que se votó en la Cámara y que las comisiones lo ratifican con lo que dejo expresado.

Esta segunda parte del artículo 1º, á que vengo refiriéndome, ha sido observada por el Comité de Empleados Nacionales, proponiendo un cambio de redacción que importaría dos modificaciones trascendentales y que de aceptarlas cambiarían las bases fundamentales del proyecto.

Se propone, en primer lugar, que se suprima la referencia que hace el artículo á la ley 1909, lo que importaría excluir de este proyecto al personal de instrucción primaria de la Capital. No me detendré á considerar por el momento este pedido ó observación, ajeno al parecer á los intereses que se invocan para representarlos, porque ya llegará la oportunidad en otra parte del informe, en que tendrá que considerarse lo que al personal de instrucción primaria se refiere.

Se pide, en segundo lugar, que los jubilados existentes de acuerdo con las leyes 2219 y 3744, no sean comprendidos en las disposiciones del proyecto de ley que se discute, sino á condición de que

Agosto 18 de 1904

CÁMARA DE SENADORES

28ª sesión ordinaria

esas jubilaciones sean sometidas á revisión, conforme á las disposiciones del mismo.

Pero, señor Presidente, son tan distintas las bases de aquellas leyes, comparadas con las contenidas en el proyecto, que de aceptar la indicación que se formula, importaría algo como no dictar la Ley de Montepío. Sobre todo, yo no sé en qué pueda afectar la incorporación de los jubilados actuales á las bases de este proyecto.

Manifiestan el temor de que, el fondo con que el Gobierno contribuye á la formación de la Caja, sea absorbido en poco tiempo por los jubilados existentes, que son numerosos y con sueldos elevados.

Pero, yo puedo decir que, según los datos, cuentas y cómputos mandados practicar por la contaduría del Congreso, para no citar otros trabajos análogos, esta afirmación es errónea, pues no constituye un peligro lo que se apunta como tal; y precisamente porque se incluyen los jubilados actuales es que el Gobierno contribuye con sumas tan crecidas á la formación del fondo de la Caja—entrega de recursos que no sería justificada por otro concepto.

Los funcionarios comprendidos en las disposiciones de esta ley quedan consignados en el artículo 2°. La primera objeción que se formuló fué la relativa al personal de la Universidad de la Capital, personal cuyo sueldo no está detallado en la Ley de Presupuesto.

Cuando se discutió este artículo en la Cámara de Diputados la Comisión declaró que entendía que estaban comprendidos en la categoría del inciso 1°.

Las comisiones á cuyo nombre informo creen lo mismo; porque, aunque en globo, la ley de Presupuesto vota sus emolumentos anualmente; y su jubilación, llegado el caso, se determinará con arreglo á la primera parte del artículo 25. El mismo alcance atribuyen á la categoría del inciso 6°.

La enumeración de funcionarios ó reparticiones públicas que no se comprenden en la ley, según el artículo 3°, fué

también materia de discusión en algunas de sus cláusulas. El inciso 2° consagra una excepción más al principio consignado en el inciso 1° del artículo 2°—y se refiere principalmente á especialistas que se contratan en Europa ó Estados Unidos para trabajos determinados y que pueden luego seguir dentro de la administración. La primera parte del inciso 3° se refiere á trabajos de carácter accidental y transitorio—y, por tanto, está bien dentro de las excepciones. La segunda parte sigue la regla general del inciso 1°, artículo 2°.

El inciso 4° está observado por la Sociedad de Beneficencia, por cuanto el personal administrativo que de ella depende no queda comprendido en esta ley.

Sobre este particular solo manifestaré á la Cámara que el Poder Ejecutivo en manera alguna interviene en el personal directivo de esa sociedad; y además, que no son empleados pagados directamente por el Tesoro, en su verdadera acepción, sino, como muchos otros, con fondos provenientes de la Lotería Nacional. Por otra parte, el aumento de personal es enorme y se hace sin control del Gobierno.

Por todo esto las comisiones han creído conveniente la disposición referida, por lo menos hasta que se adopten otras providencias que coloquen estrictamente este personal dentro de las disposiciones que consagra este proyecto.

El inciso 5° del artículo á que vengo refiriéndome, motivó la reclamación del señor gobernador de Río Negro; y tengo que hacer referencia á este punto, no obstante las explicaciones que se le dieron y que lo convencieron que estaba en error, porque solicitó expresamente una declaración.

Creía el señor Tello que, cuando el inciso 5° dice: «Esta ley no regirá respecto á las remuneraciones siguientes: 5° Las de aquellos que desempeñen comisiones accidentales ó por tiempo fijo», no se comprende en esta ley á los gobernadores de territorios nacionales.

porque son nombrados por cuatro años, es decir á término fijo; pero, se les observó que eran empleados permanentes de la Administración, directamente retribuidos por el Tesoro Nacional, lo que los coloca dentro de la disposición del inciso 1°, art. 2° del proyecto, máxime cuando nadie puede sostener que el inciso 5° se refiera á otra cosa que á comisiones accidentales ó por tiempo fijo como está claramente expresado.

Los artículos 4° al 15 inclusive legislan la formación del fondo, su destino, administración, etc. En cuanto á la importancia ó monto de los recursos del artículo 4°, es próximamente de \$ 3.700.000. Este cálculo, como los demás que se han verificado respecto á la parte financiera de esta ley, es algo variable.

El Comité Nacional de Empleados ha observado los arts. 7°, 9°, 11° y 13°.

Respecto al primero dice: «Opinamos que en caso de ausencia del presidente, debe integrarse la junta con el Presidente de la Caja de Conversión.»

No me parece que valga la pena detenerse sobre esta observación que carece de importancia y no tiene fundamento alguno consignado. No se trata, por otra parte de integrar la junta, sinó de reemplazar al presidente de la misma.

Igualmente infundada me parece la relativa al art. 9°, cuando se pretende que el presupuesto de la Caja sea pagado por el Gobierno, puesto que él nombra y remunera el personal.

Proponemos, dicen, refiriéndose al artículo 11, que se agregue al final: «en las mejores condiciones posibles». «Esto lo pedimos teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el depósito actual en el Banco de la Nación.»

Dice el artículo 11 que la Caja no podrá atesorar suma en dinero efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una reserva prudencial con tal objeto. Y que todos sus depósitos en dinero serán colocados en el Banco de la Nación, en las mejores condiciones posibles.

Es natural que la junta ha de colocar

el dinero en la forma que la ley ordena que se coloque y en las mejores condiciones posibles. Y la base de la observación estriba en la anormalidad resultante de la demora en el trámite de esta ley, porque desde el año 1901 el importe de los descuentos se deposita á la vista, cuando á plazo fijo hubiese producido más interés. Pero la Ley de Presupuesto, que ordena el descuento, dice que se ha de depositar en el Banco de la Nación, para servir de base al fondo de la Caja; y, entonces, nada de extraño tiene lo ocurrido, desde que no existía una administración establecida que velara por esos fondos de acuerdo con disposiciones legales establecidas y adecuadas. No puede tampoco resultar un cargo para el Ministro de Hacienda, porque no podía saber el momento en que se consideraría esta ley por el Congreso, y, mientras tanto, se cumplía con la cláusula legal del descuento y se le daba el destino ordenado.

Pero, establecida la administración de la Caja, no puede ocurrir lo que se observa, porque la ley establece la forma y manera de colocar y administrar los dineros pertenecientes á la misma.

Refiriéndose al artículo 13 dicen: «Pensamos que sería conveniente suprimir las palabras «salvo que la junta por unanimidad resuelva en casos especiales proceder en forma distinta.»

Esto se refiere á la inversión del dinero sobrante de la Caja.

La adquisición ó enajenación de títulos nacionales se hará por licitación, salvo que la junta resuelva por unanimidad, en casos especiales, proceder en forma distinta.

La Comisión de Hacienda fué especialmente consultada sobre este particular, y demostró con casos prácticos, ocurridos muchas veces, las ventajas incalculables de esta disposición, agregando que no se puede aplicar la licitación como regla permanente en actos de esta naturaleza.

La unanimidad de tres altos funcionarios de la Administración, garante suficientemente el acierto en los casos de excepción.

Agosto 18 de 1904

CÁMARA DE SENADORES

28ª sesión ordinaria

Señor Presidente: he expuesto con franqueza las observaciones principales de que ha sido objeto, esta que yo llamo, á los fines del informe, primera parte de este proyecto—y, puedo decirlo con igual franqueza, que nada han encontrado las comisiones que ataque seriamente su estructura.

Paso ahora al capítulo segundo, que se refiere á jubilaciones; y no necesito asegurar á la Cámara, que esta es la parte que mayores observaciones, empeños y gestiones de todo género ha suscitado. Y se explica, señor Presidente, que así sea, desde que es la que afecta mayor suma de intereses y más inmediatos.

Particularmente deploro que en este capítulo se haya retrocedido del principio establecido por la ley número 3744, de 1898, en lo que respecta á la edad y á los años de servicios; y lo deploro por un concepto aplicable á todas las disposiciones del proyecto, en su conjunto, pues, habría deseado ser más restringido y severo, si se quiere; porque, tratándose de una ley de ensayo como esta, sería más fácil, más cómodo y hasta más agradable reformarla en sentido liberal, después de experimentada en sus resultados, que tener que aplicar restricciones si el caso llegara.

Por esto hubiera deseado conservar el principio de la referida ley de 1898, que requiere más tiempo de servicios y más edad para conseguir la jubilación.

No se puede discutir seriamente que las cláusulas del proyecto no sean más ventajosas para el funcionario público, que las de la ley vigente. No se puede discutir que no estén mejor consultadas las gradaciones necesarias en la edad, tiempo de servicios y fecha de jubilación, consultando en lo posible los principios dominantes en esta materia. Y estas enunciaciones resultarán comprobadas, cuando tenga que hacerse referencia á lo que existe y á lo que se proyecta.

Según las leyes vigentes, para jubilarse con sueldo íntegro se requiere treinta y cinco años de servicios y sesenta de

edad. Esto es lo que podemos llamar el primer caso ó supuesto. Está asimismo la jubilación con sueldo íntegro para los que sirven treinta años y se encuentran imposibilitados para continuar en el trabajo. El tercer caso se refiere á los que, habiendo servido más de quince años y se inhabilitan en el ejercicio del empleo, se les acuerda la cuarenta avas partes del sueldo por cada año.

El proyecto, señor Presidente, contiene cuatro casos y, como he dicho, con mejor y más equitativa gradación. El primero es el del empleado público que, colocándose en los términos de la ley de 1898, tendría el máximo de cuota asignado—es decir, el 95 por ciento del sueldo. El segundo es el de treinta años de servicios y cincuenta y cinco de edad, con el 81 por ciento; el tercero, es el de veinte años de servicios, solamente, y el cuarto es el caso, realmente excepcional, que no requiere tiempo de servicios y que se computan como si hubiese estado quince años, á los efectos de determinar la cuota de jubilación.

Pero, aunque no se considerase ventajoso el proyecto con relación á las leyes vigentes, en sus términos generales, tiene un capital que entraña conveniencias indiscutibles y que compensan cualquier deficiencia: me refiero al derecho á la pensión, que pasa á ser de ley, en vez de ser una gracia que todos sabemos lo que cuesta — gracia sobre la cual haré una ligera referencia más adelante.

Por lo demás, el criterio que debe predominar en leyes de esta naturaleza, es el de la posibilidad de mantenerlas dentro de los recursos que se asignan para tal objeto.

El artículo 16 sugiere una duda, que ha sido materia de reclamaciones, y es la siguiente: ¿Los que están ya jubilados y siguen no obstante esto desempeñando el empleo, pueden retirarse cualquier día con la cuota establecida con anterioridad á esta ley? Las comisiones creyeron que sí, pensando que el caso estaba resuelto, por analogía, en el artículo 22.

Sobre la segunda parte del artículo 25

versa la reclamación de los empleados de banco; porque, para determinar el promedio de sueldo en las jubilaciones que debe corresponderles, se ha tomado diez años en vez de cinco que se fija para los demás empleados de la Administración. Indudablemente, esto produce una diferencia de un 20 %, me parece, en unos y otros. Pero, también debo observar que los empleados de banco ganan tres veces más que la generalidad de los empleados de la Administración; y las comisiones han creído justo reducir para aquellos la cuota de jubilación, llegado el caso.

El artículo 31 es realmente capital en esta ley, explicándose así que sobre ninguna otra disposición se hayan hecho tantos esfuerzos, por los afectados, que son los maestros de escuela y el personal de la policía.

Los primeros piden que no se les comprenda en esta ley, dejando así vigente la de 1886, hasta que se introduzcan las reformas necesarias y que están reconocidas por los mismos, desde que las provisiones de dicha ley han resultado completamente equivocadas. Agregan que si dicha petición no fuese posible atenderla, se limite á veinte años los servicios que se exigen para conseguir jubilación, sin establecer «máximo ó mínimo» de edad.

Se fundan en que empiezan temprano su carrera y que no resisten más del tiempo expresado sin ser atacados por enfermedades que los imposibilitan para continuar la tarea; que después de ese tiempo, quedan estacionarios, faltos de fuerzas y aptitudes para progresar diariamente, como se requiere, y así la enseñanza se perjudica notablemente con la continuación del maestro en tales condiciones.

La Cámara se explicará fácilmente el interés con que las comisiones han escuchado esta representación. Se han dado cuenta de toda la importancia que el personal de enseñanza primaria tiene para el porvenir de la República, y por consiguiente han debido mirarla con toda atención.

Por la ley vigente se jubilan con sueldo íntegro, cumplidos veinte años de servicios no interrumpidos—con tres cuartas partes, los que habiendo prestado quince años de servicios fuesen suprimidos en su empleo y no pudiesen ser nuevamente colocados; y, por último, con la mitad del sueldo, los que después de cumplidos diez años de servicios, se encontrasen en el caso del artículo anterior.

No tienen límite máximo ni mínimo de edad; pero tampoco tienen pensión para la familia.

En esta situación y como se trataba de algo técnico, abonado también con opiniones de facultativos, las comisiones creyeron que debían recurrir por informaciones á la fuente más autorizada sobre estas materias—al Consejo Nacional de Educación, y comisionaron al que informa, para que recabase opiniones sobre el punto que motivaba la reclamación.

Como resultado de esta información, debo manifestar al Senado que, respecto al tiempo de servicios que fija el proyecto, se me expresó por la presidencia del Consejo que no lo consideraba excesivo. Y apoyaba esta opinión en la experiencia que tenía y también en los principios consignados por legislaciones extranjeras sobre este particular, que asignan mucha más edad y mayor número de años de servicios, y siempre menor cuota de jubilación, donde se las acuerdan.

En cuanto á la edad, dijo el señor Presidente que, para los hombres, no la consideraba excesiva. Que respecto á las mujeres, por regla general se podía decir que la edad fijada en el proyecto las afectaba, porque se había notado que una maestra, á los cuarenta y cinco años decaía visiblemente y era, por lo tanto, conveniente tenerlas en cuenta para determinar una situación especial.

Como comprobante, respecto á los maestros, el señor Presidente manifestó que, no obstante los términos de la ley de 1886, no se jubilaban. Y preguntado

Agosto 18 de 1904

CÁMARA DE SENADORES

28ª sesión ordinaria

por la razón de este fenómeno, manifestó que se producía porque siempre esperaban llegar á una situación mejor á fin de conseguir una más alta cuota de jubilación. Entonces le pregunté si, no obstante lo expresado, se notaban inconvenientes en la enseñanza,—y dijo que nó. Agregó que los maestros, una vez que llegan á la dirección de una escuela, tampoco se jubilaban, no obstante tener cumplidos con exceso los plazos de la ley. Que no se jubilaban, porque, estando con plenitud de fuerzas, encontraban grandes ventajas en continuar la tarea, desde que á un mayor sueldo agregan la casa que gratuitamente habitan con su familia, y que importa un elemento de vida muy costoso en la capital.

Como síntesis del cuestionario sometido al juicio del señor presidente del consejo, le pedí que me dijera francamente los inconvenientes del proyecto que estudiábamos, y me expresó que los pocos que le notaba eran fácilmente subsanables.

Entre tanto, me expuso que la situación financiera actual del Consejo de Educación, era realmente insostenible y que no era posible continuar así. Se ha comprobado con esta manifestación, la verdad de las previsiones del señor Avelaneda, Senador por La Rioja, cuando el año 1900 decía al ex Ministro señor Berduc que, al paso que entonces se marchaba, se afectaría muy pronto y seriamente los fondos destinados al fomento de la instrucción primaria. Y esto, que en esa época, el gasto mensual era tan solo de 22.000 pesos en jubilaciones, mientras que ahora, á los tres años ha subido á 50.000, según el último dato que acabo de recibir del Consejo de Educación.

Me decía el señor presidente que la solución de tan grave estado se encontraba en el proyecto que informo.—Que él había salvado en la Cámara de Diputados sus opiniones, cuando se discutió allí este proyecto; pero, que, de todas maneras, su sanción y su vigencia inmediatas, cualquiera que fuese el tiempo de duración, no interrumpiría el servicio de la

enseñanza—y que, por el contrario, se ponía un dique á los grandes males que soportaban diariamente.—Agregó que á los maestros se les paga mejor que en todas partes y en ninguna tienen la jubilación en las condiciones que se proyecta—y esta manifestación fué ratificada en la nota que tengo á la mano, adjuntando el cuadro de los jubilados del Consejo.

Piden también los maestros que se aclare su situación en presencia de lo dispuesto por el artículo 35 del proyecto, lo que parece superfluo, porque ellos serán netamente comprendidos en la excepción. Y satisfago ese pedido haciendo la declaración que dejo consignada.

En cuanto al personal de policía, que es otro de los que ha reclamado por lo dispuesto en el artículo 31 á que vengo refiriéndome, su situación es la siguiente: La ley número 3744 jubila al personal de policía de seguridad y cuerpo de bomberos, con 25 años de servicio y 55 de edad—sueldo íntegro. El proyecto, les deja el mismo número de años de servicios y de edad. Baja un poco la cuota de jubilación, porque no puede ganar lo mismo el que trabaja que el que descansa; y en esto, se aplica el concepto general que domina en el proyecto.

La ley número 4235 determina una situación excepcional para este personal; situación que acaso no sería excesiva si no se prestase á grandes abusos. Les acuerda sueldo íntegro y pensión de las dos terceras partes para la familia, llegado el caso, cuando se inutilizan ó mueren por heridas «ó accidentes»—agregó el Senado—en el desempeño de sus funciones.

El artículo 19 del proyecto legisla exactamente los mismos casos. Se arguye que el proyecto acuerda una pequeña suma como pensión; pero, debe observarse que, para casos realmente excepcionales, no quedan cerradas las puertas del Congreso.

Por lo demás, las comisiones creen que está comprendido en el artículo todo el personal de la policía de seguridad, según los antecedentes que suministra el

informe de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados y por que sería realmente inmotivado establecer distinciones con el cuerpo de bomberos. Creen también que en el artículo se comprende la policía fluvial y marítima, como lo establece la ley 4235 aunque en el proyecto no haya una cláusula especial al respecto.

El Comité de Empleados Nacionales ha observado los artículos 17 y 18, bregando por la supresión de la edad, que consigna el proyecto, sin tener en cuenta que las disposiciones contenidas, son más favorables que las de la ley vigente. Y para fundar su petición, afirma, sin comprobaciones, que en este país se vive menos que en otras partes.

Las comisiones han tenido á la vista antecedentes deducidos de los varios censos generales y locales que se han levantado en la República y pueden asegurar que aquellas afirmaciones no son exactas.

Esta cuestión de la edad para jubilarse reviste el mayor interés. Está consignada con más extensión en las legislaciones extranjeras y afecta principios de orden moral y social que todos los señores senadores pueden comprobar «de visu». ¿No es acaso una anomalía el espectáculo que á diario presenciarnos, de funcionarios públicos retirados en virtud de la ley 2219, en la plenitud de la vida y cuando recién estaban en condiciones de rendir servicios maduros y benéficos á la República?

Los datos que sobre este particular reveló uno de los censos anteriores, son asombrosos—están publicados y no necesitan presentarlos á la Cámara, máxime cuando son conocidos de todos. Por esto, señor Presidente, el espíritu reaccionario, que sobre este particular animó al Congreso de 1898, persiste—y es bueno que así continúe—para no ser una excepción en el mundo.

Insistiendo sobre el promedio de la vida, debo hacer notar que está comprobado, por datos irrefutables, que la salubridad en la capital de la República muy poco tiene que envidiar á la de las mejo-

res y más adelantadas ciudades del mundo; y es aquí, en la Capital, donde reside el 60 % de empleados públicos que comprende este proyecto.

Además de las reformas á que he hecho referencia, se solicitan otras que pueden considerarse de detalle y que bien pueden esperar otra oportunidad para ser discutidas.

Se ha preguntado también cual es la situación de los jubilados, en presencia del artículo 34.

Este punto, señor Presidente, que afecta principios é intereses de orden elevado, fué motivo de consideraciones especiales en el seno de las comisiones.

Sancionado este proyecto, es indudable que la ley número 3744 queda totalmente derogada—y lo que contiene sobre este particular no puede subsistir.

Queda solo el referido artículo 34.

Para mí no es discutible, aún prescindiendo de la naturaleza de las funciones, que la ley de 1898 afectó intereses muy respetables y dignos de ser seriamente considerados. Si esa rebaja era posible, no cabe duda que la jubilación puede ser totalmente anulada — y pueden fijarse los señores senadores á los extremos á que se podría llegar. Esto, en cuanto á los amparados bajo la ley 2219.

Si las comisiones aceptan la rebaja del artículo 34 á que me refiero, es porque deja ampliamente compensada con el derecho á la pensión que se acuerda, no obstante la protesta y las observaciones del Comité; y, además, porque así queda armonizado con el artículo 28.

Y bien, señor Presidente: el estado actual de esta cuestión de las jubilaciones, que, sea dicho de paso, empeora cada día, fué condensado admirablemente por el ex Ministro señor Berduc, en el mensaje recordado de 1900, mandando el proyecto de ley de presupuesto para 1901. Entonces daba los datos que voy á proporcionar con toda brevedad á la Cámara, y que lejos de haber perdido su actualidad, están confirmados por la situación del momento actual.

Desde 1884 hasta 1900 se habían jubilado 1146 empleados, á los que se habían

Agosto 18 de 1904

CÁMARA DE SENADORES

28ª sesión ordinaria

pagado 16 y medio millones de pesos; y en todos esos años, sólo habían muerto sesenta jubilados, ó en otros términos, por cada muerto se habían jubilado diez y ocho. Empieza el año 1884 con 17 jubilados, para alcanzar á la cifra de 1146 en 1900.

Llamo la atención, decía, sobre la gravedad de esta demostración. Si se tiene en cuenta, en primer lugar, que la vigencia de la ley es de diez y seis años; en segundo lugar, que, antes de la federalización de esta ciudad, el cuerpo de empleados nacionales no era mayor de tres mil, no alcanzando á ocho mil en 1886, mientras que hoy llega á 24.000, y, por último, que á medida que el tiempo avanza es mayor el número de los que llegan al tiempo de servicios que la ley establece, no puede mirarse sinó con temor el porvenir.

Dice luego que la ley de 1898, que restringió este derecho, sólo suprimió el abuso; y que, así y todo, el año 1899 sólo disminuyó en uno el término medio de los jubilados.

Yo debo decir que los datos que he recibido hace dos días, de la Contaduría Nacional, acusan una marcha casi normal de las jubilaciones en el sentido que se manifestaba el señor Berduc. Nada de particular se nota en un sentido de restricción al mal apuntado; y no obstante las previsiones y anhelos del Congreso de 1898, el número de jubilados alcanza hoy á la cifra de 1190.

Habla luego el señor Berduc de lo que pasa en el Consejo Nacional de Educación, para terminar recomendando la sanción de la Ley de Montepío Civil. Y cuando el referido exministro se alarmaba, porque el año 1900 se pagaban 22.000 pesos en el Consejo Nacional de Educación por concepto de jubilaciones, preveía con acierto el momento actual, en que esa cifra ha subido á cincuenta mil pesos mensuales.

¿Y sabe la Cámara cuánto tendría que pagar el Consejo, en caso de que el personal actual hiciese uso del derecho, que estas leyes tan liberales que tenemos sobre jubilaciones, les acuerdan?

¡Importarían 111.000 pesos mensuales! —porque existe personal en estado de jubilarse, con la cantidad expresada.

Entonces, yo digo, señor Presidente que, leyes que nos han traído á esta situación, es necesario reformarlas, aunque más no sea que por vía de ensayo.

La Cámara me ha de permitir que ciere estas breves observaciones con la manifestación del señor presidente del Consejo, formulada en carta de 9 del corriente: «Le adjunto el cuadro, me dice, que Vd. pidió de las jubilaciones de maestros hasta el 31 de Julio del corriente año—y, además, lo que sucedería si quisieran los maestros en servicio acogerse á la ley vigente con el tiempo que actualmente tienen. Cualquier observación que se haga respecto de las cifras no alterará el resultado definitivo: no podemos continuar así porque no habría cómo hacer frente á esa situación. En ningún país del mundo existe una legislación tan pródiga como la nuestra: ni en Estados Unidos, tan ricos y tan generosos por lo mismo».

Viene en seguida la pérdida de las jubilaciones, que está legislada lo mismo que en las leyes vigentes y aún en sentido más favorable.

El capítulo 4º se ocupa de las pensiones, que, como lo insinué antes, es nuevo y mucho más favorable que lo existente.

Pasa á ser un derecho para los herejeros del jubilado, dejando de ser una gracia, como lo es actualmente.

Yo no necesito representar á los señores senadores cual es la vida de los que solicitan pensión; los inconvenientes é injusticias que soportan, aparejados á la extorsión que producen á los miembros del Congreso estas solicitudes.

En ninguna ocasión se patentiza más la injusticia del criterio que se aplica, votando concesiones inmotivadas en unos casos y desdénando muy legítimas exigencias en otros.

Por el proyecto que se considera, la persona que tenga derecho á pensión, no tiene más que reclamarla de la junta; y solo tendrán que ocurrir al Congreso

en casos excepcionales y en los términos ó condiciones que se establecen.

Es posible, señor Presidente, que este proyecto tenga esa virtud más, suprimiendo esta concesión de favores, votados arbitrariamente y que ocasionan un estado de censura permanente á los poderes públicos.

Las observaciones que se han formulado sobre este capítulo, son pocas y de escasa importancia. Una de ellas es porque el derecho á la pensión no alcanza á las hermanas solteras del jubilado. Es claro que así sea, señor Presidente, porque las hermanas no pueden considerarse, para estos casos, sinó como excepción rarísima, pertenecientes á la familia inmediata del jubilado. Pero ya lo he insinuado que estas leyes no pueden establecer como regla, lo que es una excepción; y para este caso, es decir, para la excepción, está la facultad del Congreso.

Igualmente se observa que las hijas deben tener derecho á pensión, aún pasada la edad de treinta años que fija el proyecto; y no se tiene en cuenta, señor Presidente, que, en la actualidad, no tienen derecho á nada, cualquiera que sea la edad. Es que se cuenta de antemano con esta munificencia del Congreso, que debe cesar y que tendrá que cesar, munificencia desigualmente repartida por innumerables consideraciones que no tengo para qué detallar.

El hecho de la contribución del empleado público para formar la Caja, no justifica el reclamo; porque se ha demostrado que así y todo, recibe enormes beneficios con las bases del proyecto.

No debo continuar, señor Presidente, molestando por más tiempo la atención de la Cámara, máxime cuando las comisiones aceptan totalmente el proyecto venido en revisión, que tiene numerosos antecedentes publicados en las colecciones oficiales.

Por esto mismo, no he debido traer cómputos y cuadros numéricos, citas de leyes extranjeras y doctrinas sociales y políticas que abonan el proyecto.

Explicar su mecanismo financiero ha-

bría importado ocupar mucho tiempo, inútilmente; máxime cuando no necesito decir á la Cámara que, sobre este particular, no podía traer opiniones propias y autorizadas. En este caso tenía que valerme, como lo he hecho, de explicaciones ofrecidas por personas competentísimas sobre estas materias, siguiendo las huellas que anduvo el Poder Ejecutivo en el año 1900, y la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados; después, y como fruto de este auxilio prestado por el digno señor Presidente de la Contaduría del Congreso y del señor Tappen, actuario de una compañía de Seguros, puedo decir en síntesis á la Cámara que, interrogados estos señores sobre las ventajas fundamentales del proyecto, me dijeron:—«El Congreso debe dictar la ley, porque la situación actual se agrava día por día y no es posible continuar.»

Nos aproximamos á un momento en que el desastre tendrá que producirse, no solo para el Tesoro, sinó también para los agraciados, porque no se podrá pagar todo lo que se vota.

«Dicten la ley, como ensayo, me agregaban, y según lo que resulte en la práctica, se propondrán las reformas, de acuerdo con las bases que contienen.» Y me decían esto, señor Presidente, porque no es posible formular cálculos racionales sobre la base financiera de la ley, puesto que los datos que se proporcionan para apreciarla son inseguros é inexactos. Y así se explica la variedad de resultados en todos los trabajos formulados por personas y comisiones de indiscutible competencia. Y esta es una razón más para haberme abstenido de entrar á este terreno en el informe que proporciono.

Una ley de este género está destinada á vivir cien años; y con todos los inconvenientes que se le han notado en ocasiones y trabajos diferentes servirá por lo menos quince ó veinte años; tiempo suficiente para que el Poder Ejecutivo y el Congreso la experimenten, discutan y reformen tranquila y seguramente.

Si este proyecto se convierte en ley,

Agosto 18 de 1904

CÁMARA DE SENADORES

28ª sesión ordinaria

valdrá lo que valgan la rectitud y dedicación de las personas llamadas á animarlo.

Las comisiones están muy lejos de creer que sea perfecto; están muy lejos de pensar que no contenga disposiciones que habría convenido tocar. Yo mismo, señor Presidente, abrigo la esperanza de cooperar en las reformas; pero, los antecedentes expuestos, la necesidad imperiosa de dictar esta ley, las han decidido, no obstante cualquier observación de detalle, á pedir á la Cámara la sanción del proyecto, tal cual fué aprobado por la de

Diputados, porque no es posible demorarlo más tiempo, sin ocasionar mayores perjuicios á la República.

He dicho.

Sr. Presidente—No habiendo número en la casa, no puede votarse el despacho de la Comisión y se levantará la sesión.

Sr. Maciá—Podemos pasar á cuarto intermedio.

Sr. Presidente—Así se hará.

—Eran las 5 y 20 p. m.

ARTURO PARODY,
Director de Taquígrafos.